

REPÚBLICA DE COLOMBIA



SALA CUARTA DE DECISION LABORAL

PROCESO	Ordinario
DEMANDANTE	Rosa Emelda Suárez Gamarra
DEMANDADO	Protección S.A., Colpensiones y Ministerio de Hacienda
PROCEDENCIA	Juzgado 010 Laboral del Cto. de Medellín
RADICADO	05001 3105 010 2022 00138 01
INSTANCIA	Segunda
PROVIDENCIA	Sentencia Nro. 181 de 2023
TEMAS Y SUBTEMAS	Ineficacia de traslado del RAIS al RPM
DECISIÓN	revoca y confirma

En la fecha, **cuatro (04) de septiembre de dos mil veintitrés (2023)**, el Tribunal Superior de Distrito Judicial de Medellín, Sala Cuarta de Decisión Laboral integrada por las magistradas: María Eugenia Gómez Velásquez, Claudia Angélica Martínez Castillo y Luz Amparo Gómez Aristizábal, procede a emitir pronunciamiento frente al **recurso de apelación** interpuesto por la apoderada de la **AFP Protección S.A.**, y grado jurisdiccional de consulta para **Colpensiones**, en relación con la sentencia proferida por el Juzgado Décimo laboral del Circuito dentro del proceso ordinario promovido por **Rosa Emelda Suárez Gamarra**. Radicado único nacional 05001 3105 **010 2022 00138** 01, trámite en que también se vinculó al Ministerio de Hacienda y Crédito Público.

La Magistrada ponente, en acatamiento de lo previsto en el artículo 13 de la Ley 2213 de 2022, sometió a consideración el proyecto discutido y aprobado mediante acta N°. **022**, que se plasma a continuación:

Antecedentes

Pide la demandante se declare la **nulidad – ineficacia** de su afiliación al RSPMPD administrado por Colpensiones, y se le tenga válidamente vinculada a la AFP Protección S.A., conservando los beneficios del RAIS.

En consecuencia, se condene a la entidad pública a devolver al fondo privado la totalidad de semanas allí aportadas y a este a reconocerle garantía de pensión mínima con mesadas retroactivas desde la fecha de la última cotización, **01 de septiembre de 2020**. Solicita también la imposición de intereses moratorios artículo 141 de la Ley 100 de 1993, indexación, costas y agencias en derecho. En **subsidio** ruega la devolución de saldos.

En sustento de ello afirma que, se incorporó al RPM el **28/06/1978**, el 24 de junio de 1997 se trasladó al RAIS administrado por Cesantías y Pensiones Colmena AIG hoy Protección S.A., para ratificar tal acto tuvo movilidad a Colfondos S.A. Pensiones y Cesantías, y luego retornó a la administradora inicial. Posteriormente regresó a Colpensiones y allí permanece, encontrándose *inconforme con dicha situación pues, no fue debidamente asesorada, ni informada sobre las implicaciones y consecuencias de trasladarse* del RAIS al RPMPD. Advierte que para el **21/11/2011**, cuando transitó a Colpensiones, estaba a menos de 10 años de la edad para pensionarse. Agrega que ni el fondo privado ni el público le explicaron que con tal movilidad perdería los beneficios del RAIS, entre ellos la posibilidad de acceder a la garantía de pensión mínima establecida en el artículo 65 de la Ley 100 de 1993 o su correspondiente devolución de saldos, pues nunca recibió explicación alguna de Colpensiones y para el 06/09/2012 cumplió 57 años. **Es reiterativa** en que ni **Colpensiones ni Protección S.A.** cumplieron obligaciones tales

como: evaluación de su situación pensional, estudio de prestaciones con arreglo al RPMPD y al RAIS, garantía de pensión mínima, devolución de saldos con la respectiva capitalización de los bonos pensionales, la negociación del bono, devolución de saldos más rentable que la indemnización sustitutiva, no brindándosele buen consejo. Puntualiza que computando el tiempo respaldo en bono pensional, aportes al fondo privado y los realizados a Colpensiones acumula un total de **1.175 semanas**, con las que puede optar por la garantía de pensión mínima o la devolución de saldos que sería muy superior a la indemnización sustitutiva.

En auto del **18 de julio de 2022, se admitió y ordenó dar trámite a la acción**, al igual que la vinculación por pasiva de la Nación – Ministerio de Hacienda y Crédito Público. Debidamente notificadas, dentro del término para ello se allegaron escritos de contestación por:

Colpensiones, de los hechos acepta la vinculación de la actora al RPM desde el 28/05/1978, su afiliación al RAIS administrado por Colmena AIG hoy Protección S.A., el 24/06/1997, el tránsito entre administradoras y el retorno al régimen público el 21/11/2011 fecha en que estaba a menos de 10 años de la edad para pensión, arribando a los 57 años el 06/09/2012. Los restantes supuestos son apreciaciones subjetivas del apoderado. **Resistió** las pretensiones en contra de la entidad, frente a las dirigidas a Protección S.A. se abstuvo de emitir réplica. Formuló **las excepciones** de: inexistencia de la nulidad o ineficacia del traslado de régimen pensional, prescripción, buena fe, imposibilidad de condena en costas y compensación.

AFP Protección S.A., manifestando frente a los hechos, ser cierta la afiliación de la actora al RAIS a través del Colmena AIG el 24/06/1997, el cambio de administradoras, y su posterior retorno al RPM el **21/11/2011**, arribando a los 57 años el 06/09/2012. Los demás supuestos no le constan o no son ciertos. Explica que al momento de la incorporación de la actora al RAIS se le informó claramente que el sistema pensional está compuesto por dos regímenes diferentes y excluyentes entre sí, sin que pueda hablarse de ventajas y desventajas. La asesoría entregada fue totalmente objetiva, precisándosele aspectos como: cuenta de ahorro individual vs. Fondo común; capital acumulado vs. Requisitos de edad y semanas de cotización; garantía de pensión mínima en el RAIS; devolución de saldos vs. Indemnización sustitutiva, **Se opuso** a las pretensiones que la comprometen y propuso **las excepciones** de: inexistencia de la obligación y falta de causa para pedir, buena fe, prescripción, hecho exclusivo de un tercero, imposibilidad de traslado de régimen con base en el artículo 2 de la Ley 797 de 2003, prescripción, traslado de aportes y la innominada o genérica.

El **Ministerio de Hacienda y Crédito Público**, pese a haber sido debidamente enterado, guardó silencio, teniéndose por no contestada la acción por parte de la entidad en auto del 17 de marzo de 2023.

La primera instancia terminó con sentencia emitida por el Juzgado Décimo Laboral del Circuito el **06 de julio** del año que corre, declarando **ineficaz** el cambio de sistema pensional efectuado por la actora al afiliarse al RPM proveniente del RAIS, y que siempre ha permanecido vinculada a Protección S.A. sin solución de continuidad. Condenó a Colpensiones a retornar, dentro de los 30 días siguientes a la ejecutoria

de la sentencia, *todas las cotizaciones de la demandante, sin lugar a descuentos... que se hubiesen podido generar por el periodo en el cual... ha permanecido afiliada a dicho fondo, esto es, entre el 1º de diciembre de 2011 (fecha de efectividad del traslado) hasta la fecha en que se realice el traslado efectivo al RAIS. Sumas que deberán ser indexadas al momento de su depósito efectivo en la AFP PROTECCIÓN S.A., adjuntándose relación de conceptos con sus respectivos montos, junto con el detalle pormenorizado de los ciclos, IBC, aportes y demás información relevante que los justifiquen. Protección S.A. debe recibir de Colpensiones los valores aludidos, e incorporarlos como aportes pensionales en la cuenta de ahorro individual a nombre de la demandante, imputándolos a los periodos en que fueron cotizados en el RPM y de acuerdo al IBC que fue aportado, cotizaciones que habrán de tenerse como semanas válidamente aportadas para el reconocimiento de las prestaciones económicas que lleguen a generarse.* Ordenando a Protección S.A. *que una vez se REALICE EL TRASLADO EFECTIVO DE LOS APORTES y teniendo en cuenta el bono pensional, verifique si la demandante ROSA EMELDA SUAREZ GAMARRA... cumple con los requisitos para acceder a una pensión de vejez en el RAIS, y en caso de que no cumpla con ello, VERIFIQUE si hay lugar al reconocimiento de la prestación de vejez con garantía de pensión mínima o a la devolución de saldos.* Impartió absolución para el Ministerio de Hacienda y Crédito Público. Declarando no probada la excepción de prescripción y las demás implícitamente resueltas en forma negativa. Impuso condena en costas a Colpensiones, fijando el monto de las agencias en derecho en valor equivalente a un SMLMV de 2023.

Argumentó el juzgador que sin recibir información y solo con suscripción de formulario el 21/11/2011 la actora retornó al RPM, desconociendo los riesgos y beneficios que tal acto conllevaba, y además para tal calenda contaba con 56 años por lo que estaba dentro de la prohibición para el cambio prevista en el artículo 2º de la Ley 797 de 2003, siendo los medios de prueba allegados genéricos, y no suficientes para demostrar la debida asesoría, por lo que estableció que la vinculación valida es al

RAIS, debiendo Colpensiones restituir los aportes que se le han realizado, debidamente indexados para evitar su depreciación, y una vez recibidos por **Protección S.A.** verificará si alcanza el capital para o pensión ordinaria o garantía de pensión mínima, y en caso negativo, procederá a la devolución de saldos.

Inconforme con tal veredicto, se interpuso **recurso de apelación** por la apoderada de la **AFP Protección S.A.**, argumentando que la señora Suárez Gamarra se trasladó de régimen para 2011 y esta solicitud la hizo con todo el conocimiento y asesoría de Colpensiones, por lo que pide se **revoque** la sentencia y en caso de mantenerse la decisión Colpensiones retorne todo lo aportado tal como está descrito en norma, esto es, cuotas de administración, seguros invalidez y sobrevivencia indexados, para que la AFP pueda realizar el estudio de la prestación económica que corresponda.

De la etapa de alegaciones hizo uso **el apoderado judicial de Colpensiones**, aduciendo que la movilidad que la actora hizo del RAIS al RPM goza de plena validez, pues se ajusta a la ley y como consumidora financiera también tiene obligaciones en los términos del Decreto 2241 de 2010, concluyendo que *el traslado se realizó de forma voluntaria y espontanea por la parte demandante, y que COLPENSIONES no intervino ni afectó en forma alguna su decisión, y que, pese a la acusación de la demandante sobre el debido consejo, éste nunca solicitó ningún tipo de asesoría previa ante el ISS o COLPENSIONES con el fin de tomar la decisión de trasladarse o no.*

En orden a decidir, basten las siguientes,

Consideraciones:

Como hechos debidamente acreditados en los autos, y que resultan relevantes para el estudio del asunto se tienen: la fecha de nacimiento de la demandante, **06 de septiembre de 1955**, su incorporación al sistema pensional en el RPM, el 28 de junio de 1978, **con 784,45 semanas aportadas al 1º de abril de 1994**; de acuerdo con información contenida en certificado SIAFP, expedido por ASOFONDOS, con solicitud suscrita el 25 de octubre de 1994 se trasladó a Colfondos S.A. Pensiones y Cesantías; el 24 de junio de 1997 hizo cambio a Colmena; el 1º de abril de 2000 a ING hoy Protección S.A., y **el 21 de octubre de 2011 retornó a Colpensiones**, computando en toda la vida laboral, hasta el **31 de agosto de 2020**, incluidos los tiempos no cotizados al servicio de Ecopetrol S.A., un total de **1.175,56 semanas**. A partir **del mes de junio de 2016 y hasta el mes de agosto de 2020, con aportes subsidiados**. El 05 de marzo de 2015, la actora pidió el otorgamiento de pensión de vejez, negada con Resolución GNR 209567 del 14 de julio de 2015, al contabilizar solo 906 semanas, haciéndole saber la posibilidad de continuar cotizando o la de optar por la indemnización sustitutiva.

En tales condiciones, le corresponde a esta instancia definir **si la movilidad que hizo la señora Rosa Emelda del RAIS al RPM mediante solicitud suscrita el 21 de noviembre de 2011, carece de validez y eficacia**, como lo concluyó el a quo, o si tal acto goza de plenos efectos jurídicos al hacerse con el conocimiento y asesoría por Colpensiones como se afirma por Protección S.A..

Pues bien. Reiterada ha sido la línea de la jurisprudencia **mayoritaria** de la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, desde el año 2008, en torno a la **carencia de efectos jurídicos del traslado**

de régimen pensional cuando no está precedido de una suficiente, completa, clara, comprensible y oportuna información, sobre las reales implicaciones de abandonar el régimen de prima media con prestación definida y sus posibles consecuencias futuras, siendo el efecto de tal omisión la ineficacia de la movilidad en los términos de los artículos 13 literal b), 271 y 272 de la Ley 100 de 1993, y ello por ser la debida asesoría,

... una expresión de responsabilidad en una actividad profesional que se ejecuta en el marco regulatorio del servicio público de Seguridad Social, bajo la dirección, coordinación y control del Estado, según lo dispone el artículo 48 de la CP, siendo las dos primeras actividades mencionadas una manifestación típica de la política pública y, la última, una materialización de la inspección y vigilancia que corresponde ejercer a través del ente especializado para el efecto. Ver sentencia SL4322-2022.

Pero a pesar de estar definido el tema, no se puede perder de vista que los casos estudiados por el órgano de cierre de esta especialidad están referidos a **afiliados** que efectuaron el cambio **del régimen de prima media con prestación definida al de ahorro individual con solidaridad**, y en este asunto la situación planteada es contraria, advirtiendo la actora en forma reiterativa que para la fecha de retorno al **Seguro Social**, hoy **Colpensiones**, se encontraba dentro de la restricción de los 10 años de la edad para pensión que introdujo la Ley 797 de 2003, aspecto este último **en que no le asiste razón**, y al que el fallador de primer grado le dio **absoluta prevalencia**, y ello porque como se vio, la señora **Rosa Emelda cuenta con más de 750 cotizadas al RMP antes del 1º de abril de 1994, calenda de entrada en vigencia del sistema pensional**, por lo que su movilidad se puede dar en cualquier época.

Reclama además la promotora doble asesoría al firmar en los hechos que soportan sus súplicas que:

La ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES – COLPENSIONES, ni ADMINISTRADORA DE FONDO DE PENSIONES Y CESANTIAS ING, hoy PROTECCION, le INFORMARON... que de afiliarse al REGIMEN SOLIDARIO DE PRIMA MEDIA CON PRESTACIÓN DEFINIDA perdería los BENEFICIOS del REGIMEN DE AHORRO INDIVIDUAL CON SOLIDARIDAD, entre ellos la respectiva GARANTIA DE PENSIÓN MINIMA establecida en el artículo 65 de la Ley 100 de 1993 o su correspondiente DEVOLUCIÓN DE SALDOS, pues se recalca, nunca hubo información clara sobre el traslado a COLPENSIONES.

Por lo que recalca, no acataron las convocadas la obligación de estudiarle su situación particular, efectuándole el correspondiente comparativo e ilustrándola sobre las diferencias del RAIS y el RPM en cuanto a prestaciones concretas como la garantía de pensión mínima, devolución de saldos con la respectiva capitalización del bono pensional y la indemnización sustitutiva.

Y en efecto se tiene que el artículo 1º del Decreto 4121 del 02 de noviembre de 2011, determinó:

*Cambiase la naturaleza jurídica de la Administradora Colombiana de Pensiones - Colpensiones, Empresa Industrial y Comercial del Estado, al de **Empresa Industrial y Comercial del Estado organizada como entidad financiera de carácter especial, vinculada al Ministerio de Trabajo**, para que ejerza las funciones señaladas en el presente decreto y en las disposiciones legales vigentes, con la finalidad de otorgar los derechos y beneficios establecidos por el sistema general de seguridad social consagrado en el artículo 48 de la Constitución Política.*

Siendo, entre otras, consecuencia de tal modificación que su actividad este regida, además de la Ley 100 de 1993 y demás normas que la modifican o adicionan, por **el Estatuto Orgánico del Sistema Financiero** y sometida a la vigilancia de la Superintendencia financiera, señalándose en

los considerandos el mencionado Decreto 4121 que el cambio de naturaleza jurídica y sus consecuentes ajustes estructurales obedecen a:

Que las funciones asignadas por la ley a la Administradora Colombiana de Pensiones - Colpensiones, deben cumplirse con la finalidad de lograr la mayor rentabilidad social mediante la mejor utilización económica y social de los recursos administrativos, técnicos y financieros disponibles para que los beneficios a que da derecho el sistema pensional y el sistema de ahorros de beneficios económicos sean prestados en forma adecuada, oportuna, eficiente y sin ninguna clase de limitación, disminución o restricción con el fin de asegurar el goce efectivo del derecho a la seguridad social.

Que la vigilancia de la Superintendencia Financiera de Colombia contribuye a que el servicio y los derechos de los afiliados, pensionados, ahorradores y beneficiarios de Colpensiones sean otorgados bajo criterios de seguridad, transparencia y eficiencia sin afectar sus derechos;

Que la prestación de servicios financieros por parte de Colpensiones tiene como objetivo primordial garantizar la protección del derecho a la seguridad social de los usuarios y en ningún caso los argumentos financieros serán una justificación para negarse a prestar eficiente y oportunamente los servicios que le corresponden;

Que la administración eficiente de la operación de Colpensiones permitirá la generación de excedentes financieros que se destinarán a los fondos de vejez, contribuyendo con la sostenibilidad financiera del sistema de pensiones;

Que debe asegurarse que los costos financieros asociados a la administración del régimen de prima media con prestación definida y del sistema de ahorros de beneficios económicos, permitan efectividad en la orientación, otorgamiento y distribución de los derechos asociados al sistema general de seguridad social establecido en la Constitución Política;

Que la Administradora Colombiana de Pensiones, Colpensiones, organizada como entidad prestadora de servicios financieros, permitirá lograr eficiencias en las operaciones de recaudo, administración y pago, así como mejorar la estructura de costos asociados a estas funciones, para lograr mayor cubrimiento, eficiencia y rentabilidad social para los afiliados, ahorradores, beneficiarios y pensionados;

Que de conformidad con el artículo 3º del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, las administradoras de pensiones hacen parte de la estructura de las entidades financieras, como prestadoras de servicios financieros;...
Negrillas intencionales.

Por lo que, al **igual que a las AFP del régimen privado**, el fondo público también está **obligado al cumplimiento del deber de información** a favor del consumidor financiero, calidad que ostentan los afiliados del sistema general de pensiones, sin que por ello sus actos escapen al control judicial.

En sentencia T427-2022, luego de hacer referencia al deber de información, se explica por la Corte Constitucional,

...

93. La Ley 100 de 1993 estableció el sistema de seguridad social integral, planteándose como objetivo: "[...] **garantizar los derechos irrenunciables de la persona y la comunidad para obtener la calidad de vida acorde con la dignidad humana, mediante la protección de las contingencias que la afecten**" (art. 1).
94. **Una de las contingencias reconocidas por este sistema es la de vejez**, atendida particularmente por el sistema general de pensiones (Libro I, Ley 100 de 1993) que está compuesto por el régimen solidario de prima media con prestación definida (Libro I, Título II, Ley 100 de 1993) y el régimen de ahorro individual con solidaridad (Libro I, Título III, Ley 100 de 1993), sistemas que son excluyentes pero que coexisten.
95. De acuerdo con el art. 10 de la Ley 100 de 1993, el objetivo del régimen de pensiones es "[...] garantizar a la población, el amparo contra las contingencias derivadas de la vejez, la invalidez y la muerte, mediante el reconocimiento de las pensiones y prestaciones que se determinan en la presente Ley, **así como propender por la ampliación progresiva de cobertura a los segmentos de población no cubiertos con un sistema de pensiones**".
96. La Corte Constitucional ha señalado que, **dado el carácter vitalicio de la pensión de vejez, es el mecanismo principal con que cuenta el sistema para atender las contingencias derivadas de la merma en la capacidad productiva y, por tanto, es la prestación que mejor cumple con los objetivos del sistema**. No obstante, los regímenes pensionales contemplan situaciones en las cuales no es posible para el afiliado acreditar los requisitos para su reconocimiento, de allí que se prevean prestaciones económicas subsidiarias, como la indemnización sustitutiva y la devolución de saldos.

97. La devolución de saldos es una prestación subsidiaria o complementaria del RAIS, que está desarrollada en el art. 66 de la Ley 100 de 1993 y reconocida en el literal p) del art. 2 de la Ley 797 de 2003. Negrillas ajenas al texto.

Y el principio de **progresividad en materia pensional**, es ilustrado, entre otras, en sentencia T1072-2007, en los siguientes términos:

De conformidad con el artículo 48 de la Carta Política la Seguridad Social es un derecho irrenunciable de todas las personas y un servicio público obligatorio que debe ser prestado por el Estado. Así, es deber del Estado, prestar una "*Seguridad Social integral, que proteja a las personas ante las distintas contingencias que puedan menguar su estado de salud y su capacidad económica, con afectación de sus medios de subsistencia o los de su núcleo familiar*".

Respecto de la importancia de la Seguridad Social en el ordenamiento constitucional colombiano, esta Corporación ha señalado lo siguiente:

"La seguridad social bebe de las fuentes de la solidaridad y el altruismo social como filosofías fundantes del Estado, guarda relación con los principios esenciales del Estado y propugna por la conservación de la calidad de vida de las personas; en este sentido, la Corte ha sostenido que "[e]n un Estado social de derecho como el nuestro, la seguridad social adquiere una trascendental importancia pues con ella se busca no sólo la protección de la persona humana, cualquiera que sea su sexo, raza, edad, condición social, etc., sino también contribuir a su desarrollo y bienestar, con especial énfasis a las personas marginadas y a las de los sectores más vulnerables de la población para que puedan lograr su integración social".

Desde la perspectiva del derecho, la seguridad social ha sido calificada como uno de naturaleza asistencial o prestacional que debe ser garantizado de forma progresiva y programática por el Estado. Por su parte, desde la arista del servicio público, de **conformidad con lo señalado por el artículo 48 constitucional, éste debe prestarse con base en los principios** de eficiencia, universalidad, solidaridad, **progresividad**, integralidad, unidad y participación cuyo alcance se encuentra definido por la ley.

Específicamente, el principio de progresividad, implica, de una parte, el deber del Estado de avanzar en la materialización del derecho en cabeza de todas las personas, procurando el alcance de mayores beneficios por parte de la población y, de otra, la prohibición general, en principio, de establecer medidas regresivas, es decir, medidas que desconozcan reconocimientos que se hayan logrado a favor de los asociados.

El principio de progresividad, inherente a los derechos de segunda generación y predicable del derecho a la seguridad social por expreso mandato del artículo 48 constitucional, ha sido desarrollado *in extenso* por la jurisprudencia de esta Corporación; así, la misma ha sostenido que *"existen unos contenidos mínimos o esenciales de satisfacción de ese derecho que el Estado debe garantizar a todas las personas. Esto es, la progresividad hace referencia al reconocimiento de prestaciones mayores y superiores en relación con cada uno de esos derechos sociales prestacionales, pero ese mandato de progresividad no excusa el incumplimiento del deber del Estado de asegurar, tan pronto como sea posible, coberturas universales de los contenidos mínimos de esos derechos, tal y como esta Corte ya lo había reconocido con anterioridad"*. (negrilla fuera de texto).

En Sentencia T-580 de 2007, **la Corte destacó cómo el principio de progresividad, consagrado en nuestras normas constitucionales, se acompasa con instrumentos internacionales de derechos humanos firmados por el Estado colombiano, tales como el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, la Convención Americana de Derechos Humanos y el Protocolo de San Salvador, a la luz de los cuales puede colegirse que "el principio de progresividad, que según abundante jurisprudencia de esta Corporación constituye el rasgo esencial de los derechos sociales, parece sugerir que el único deber jurídico que impone a los Estados es el de no deshacer de manera injustificada el eventual desarrollo legislativo que haya sido ofrecido; lo cual se opondría al reconocimiento de un contenido intrínseco de estos derechos"**

Así las cosas, en sana lógica, es factible afirmar que al no recibir la demandante el debido acompañamiento por parte de Colpensiones, y pese a sus esfuerzos en aras para acumular el número mínimo de semanas que le permitieran acceder a la prestación por vejez en el RPM ello no le fue posible, por lo que teniendo mejores garantías en el fondo privado, pues con las **1.175 semanas** registradas en historia laboral actualizada al 20 de junio de 2022, una vez consolidado el capital en su cuenta de ahorro individual le es posible acceder, a la pensión ordinaria prevista en el artículo 64 de la Ley 100 de 1993, **o en subsidio a la garantía de pensión mínima**, en los términos de los artículos 65 y 83 del mismo estatuto, obviando la excepción que traía el canon 84, al haber sido expresamente derogado por el 336 de la Ley 1955 de 2019, por lo que se mantiene en firme el pronunciamiento de primer grado, ello en armonía con los artículos 272 de la Ley 100 de 1993, 48 y 53 de la Carta Superior, **revocando lo**

atinente a la devolución de saldos, al superarse las exigencias, en caso extremo, para la garantía mínima.

Se confirma lo atinente a la restitución de recursos por parte de Colpensiones a Protección S.A., acompañada de la correspondiente relación de conceptos y valores, en los términos dispuestos por la primera instancia, al encontrarse tal orden ajustada a derecho y no haberse efectuado reparo concreto por la AFP.

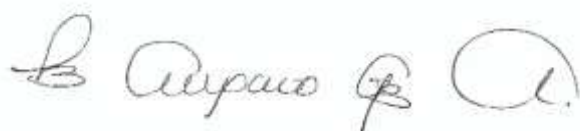
Las costas en esta instancia corren a cargo de la AFP Protección S.A. a quien se desata adversamente la alzada. Las agencias en derecho se fijan en la suma de \$1.160.000,00 a favor de la demandante.

En mérito de lo expuesto, la **Sala Cuarta de Decisión Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial Medellín**, administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, **revoca** la sentencia proferida por el Juzgado **Décimo** Laboral del Circuito dentro del proceso ordinario promovido por **Rosa Emelda Suárez Gamarra**, en cuanto dispuso la devolución de saldos, al satisfacerse por la afiliada las exigencias para la garantía de pensión mínima, debiendo analizarse inicialmente si cuenta con capital para financiar la ordinaria regulada en el artículo 64 de la Ley 100 de 1993. **En lo demás confirma.**

Las costas en esta instancia corren a cargo de la AFP Protección S.A. a quien se desata adversamente la alzada. Las agencias en derecho se fijan en la suma de \$1.160.000,00 a favor de la demandante

Lo resuelto se notifica a las partes por **EDICTO, que se fijara por secretaria por el término de un día**, en acatamiento a lo dispuesto por la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia en auto AL2550-2021.

Las magistradas (firmas escaneadas)



LUZ AMPARO GÓMEZ ARITIZABAL



MARÍA EUGENIA GÓMEZ VELÁSQUEZ



CLAUDIA ANGÉLICA MARTÍNEZ CASTILLO